

Evolución Reciente del Ambientalismo en Costa Rica

Álvaro Fernández-González, M.Sc.¹

Introducción.....	1
A. La situación ambiental en Costa Rica	4
1. La agenda “verde”: políticas en el campo de la biodiversidad	5
2. La agenda “marrón”: políticas en el campo de la contaminación.....	9
B. Evolución del ambientalismo en Costa Rica: casos recientes	12
1. AECO en la Península de Osa: el revés de Stone Container	12
2. El Foro Emaús: por una agricultura sostenible en la vertiente norte del Caribe	15
3. ¿Agua que no has de beber? Hacia una nueva visión de los recursos hídricos en Costa Rica	17
C. Conclusión (provisional) y líneas de investigación	22
1. Identidad y estrategia del ambientalismo en Costa Rica	22
2. Evolución del capital sociocultural ambientalista	26
Bibliografía citada.....	27

INTRODUCCIÓN

La investigación actual sobre el movimiento ambientalista en Costa Rica ofrece importantes vacíos. Uno de ellos es el análisis *propriadamente político* de la política ambiental y, en particular, el escrutinio (tanto político como ético) sobre la constitución y dinámica de un eventual *sujeto político* ambientalista (si tal sujeto existe o queremos que exista, ¿cómo se está fraguan-

¹ Investigador, Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica. Doctorante en Estudios de la Sociedad y la Cultura, Universidad de Costa Rica. E-mail: afernandez@odd.ucr.ac.cr. URL: <http://www.odd.ucr.ac.cr>. Ponencia presentada en la *IV Conferencia Regional de América Latina y del Caribe de la Sociedad Internacional de Investigación para el Tercer Sector (ISTR): "El papel de la sociedad civil en los procesos de desarrollo: un diálogo multisectorial"*, 8-10 de octubre, 2003, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.

do, y cuál es o debe ser su horizonte ético?) (Martínez-Alier, 1991; Fernández-González, 2003b). En esta perspectiva se inscriben las siguientes reflexiones.

El ambientalismo costarricense ha avanzado durante los últimos cuarenta años en la consolidación de una agenda “verde” (relacionada con el ambiente natural y la conservación de la biodiversidad). Mientras tanto, las agendas “marrón” (relacionada con problemas de contaminación), “azul” (del agua) y “gris” (del ordenamiento urbano) se hallan apenas en el tintero (Boyce y otros, 1994; Fernández-González, 2003b). Más aún: la percepción holística y sinérgica de lo ambiental como imbricado en toda acción social no es todavía más que una intuición imprecisa para unos cuantos.

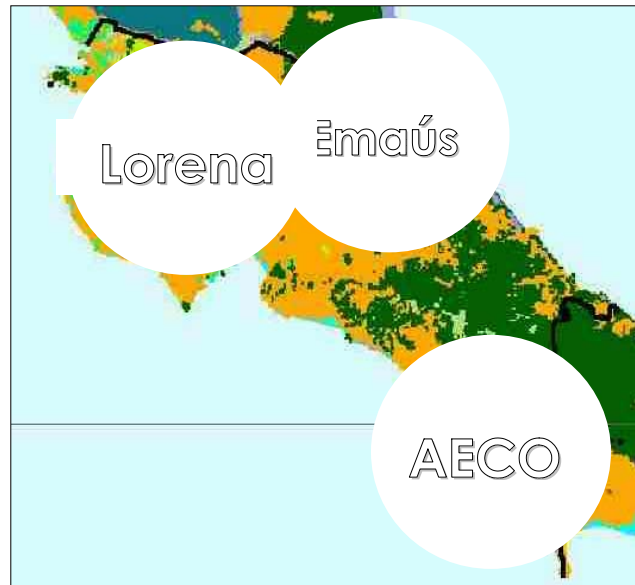
Y más allá de las *agendas*, aflora la cuestión del *agente*: la construcción de un *sujeto político* ambientalista —que congregue en torno a un accionar común a sectores determinantes de la sociedad nacional— escasamente comienza a proyectarse. Sin embargo, la configuración gradual del *sujeto* a partir del *movimiento* se manifiesta durante las últimas cuatro décadas en un lento pero acumulativo efecto de irradiación desde pequeños grupos de intelectuales o activistas a círculos cada vez más amplios de la población.

Donde alienta el dinamismo medular de esta evolución es en acciones que desarrollan una *nueva* institucionalidad, a través de lo que algunos denominan la formación de *capital social* (Ostrom y otros, 1993). En este plano, la construcción de una ética de la sostenibilidad va mucho más allá del campo de la legislación o las políticas. Hay un reto fundamental de crear —colectivamente— códigos de comportamiento coherentes y eficaces, que se cumplan en las voluntades, más acá y más allá de los códigos escritos “en piedra”. Reglas en uso, asumidas libremente por las personas, que involucren nuestra identidad como ciudadanos, como consumidores y productores, como hijos e hijas de un Tiempo y una Vida que requieren de nuestro concurso decidido para subsistir, para recrearse, para reverdecer, para trascender. En el surgimiento de esta nueva identidad ambientalista, es central el requerimiento o conminación de aquellos que padecen o padecerán la degradación ambiental, y de la naturaleza misma como Otra degradada o aniquilada.

Este ensayo esboza, en una primera sección, algunos de los principales antecedentes de la política ambiental en Costa Rica en los últimos veinte años. Una segunda sección presenta una aproximación más detallada a tres movimientos recientes de la sociedad civil, que muestran un

abanico representativo de las más importantes luchas ambientalistas impulsadas en Costa Rica en los últimos diez años (ver la ilustración adjunta):

1. *Agenda verde*: La lucha de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO) en la Península de Osa (vertiente del Pacífico sur).
2. *Agenda marrón*: El Foro Emaús y la lucha por una agricultura ambiental y socialmente sostenible en la vertiente norte del Caribe.
3. *Agenda azul*: La lucha de varias comunidades costeras —lideradas por el pueblo de Lorena— para garantizarse el acceso al agua potable en Guanacaste (vertiente del Pacífico norte), en el contexto del proceso nacional para establecer una nueva legalidad en la administración de los recursos hídricos.



La descripción de estos movimientos ambientales sugiere líneas de interpretación e investigación futura, que se presentan en una tercera sección. Entre las cuestiones básicas que buscamos elucidar (en una primera aproximación) están las siguientes, sobre las características, trayectorias, alcances e impactos de los movimientos ambientales en Costa Rica:

- ¿Qué similitudes y diferencias existen en el desarrollo de estos movimientos en diversos ámbitos geográficos, ideológicos y temáticos?
- ¿Qué influencia recíproca ha habido entre los movimientos ambientalistas y otros actores en su trayectoria y desarrollo?
- ¿Cuál es el rol actual y los aportes —o también, la identidad y proyección— de estos movimientos sociales? En particular, ¿cómo han contribuido en la creación de un capital social que podamos llamar, en algún sentido, ambientalista?

A. LA SITUACIÓN AMBIENTAL EN COSTA RICA ²

Ubicado entre los paralelos 8 y 11 al norte del ecuador, bajo el doble influjo del Mar Caribe y el Océano Pacífico, Costa Rica es un país tropical con un rango de precipitación de 500 milímetros anuales en la vertiente norte del Pacífico hasta los 5.000 milímetros en la vertiente norte del Caribe. Según la altura y la ubicación geográfica, las temperaturas varían notablemente, entre 0 y 10 grados centígrados en las montañas más altas, y 21 y 30 grados centígrados en las costas y zonas bajas.

Por su evolución geológica y su posición geográfica en el marco continental (intercontinental e interoceánica), Costa Rica presenta características ambientales de naturaleza peculiar. Su formación se inició hace unos 150 millones de años, en el Mesozoico, en el amplio canal que entonces separaba el norte y el sur de América. Hace tres millones de años, el levantamiento de tres cordilleras volcánicas sobre el nivel del mar, en alturas de hasta 3.800 metros, constituyó un pequeño puente de carácter geológico entre las dos masas subcontinentales, y de naturaleza biológica entre los reinos del neoártico y el neotropical. Por la diversidad resultante de alturas, temperaturas y microclimas, en Costa Rica existe una pluralidad de hábitats naturales: bosques tropicales secos, pantanos, manglares, bosques lluviosos, bosques nubosos, arrecifes de coral, playas, páramos, lagos, ríos y praderas. Pese al predominio de una flora y fauna neotropical, se han localizado también especies neoárticas en las tierras altas. De ahí que el país sea en la actualidad uno de los más biodiversos del planeta, en proporción a su territorio: más de medio millón de especies (alrededor de un 4% de las especies conocidas en la Tierra), en poco más de 51.199 kilómetros cuadrados (un 0,001% de la extensión terrestre). De estas especies, se estima que un 10% de las plantas, 16 especies de vertebrados y entre un 10 y un 30% de insectos son endémicos.

En la actualidad, esta biodiversidad se encuentra amenazada por dos causas correlacionadas: las altísimas tasas de deforestación experimentadas por el país en los últimos cincuenta años (provocadas por factores demográficos y económicos), y la relativamente poca valoración de los servicios ambientales del bosque. Sin embargo, es también en este campo donde el país ha realizado en los últimos veinticinco años uno de sus mayores esfuerzos de reorientación política e institucional. Cambios en la legislación forestal, creación de legislación ambiental y sobre biodiversidad, consolidación, desconcentración y descentralización de áreas de conservación, es-

² Esta sección se basa en Fournier (1991), Fernández-González (1998) y MINAE y PNUMA (2002).

tudio sistemático de la biodiversidad, son algunas de las principales políticas emprendidas en los últimos años. De estas políticas emerge y comienza a plasmarse un nuevo concepto de ordenamiento y administración territorial, con una mayor importancia de la participación local y municipal en el manejo de recursos naturales estratégicos como el agua, el suelo y los bosques.

La otra gran cuestión ambiental que enfrenta el país en los umbrales del siglo XXI se relaciona con el problema creciente de la contaminación. El consumo de plaguicidas y, en general, agroquímicos tiene una de las tasas por habitante más altas del mundo, con un impacto aún no bien conocido en los mantos acuíferos y en la salud pública (el cáncer constituye una de las principales causas de muerte, y la incidencia de cáncer gástrico es de las más altas a nivel global). Por otro lado, los patrones de consumo de la modernidad, cada vez más generalizados en el país, provocan la generación de una cantidad creciente de contaminantes aéreos, sónicos y desechos industriales tanto como domésticos, afectando igualmente la salud pública en forma poco estudiada. En este ámbito también ha emergido en Costa Rica un cuerpo creciente de políticas de regulación, control y prevención, el cual —aunque menos coherente y sistemático que en el caso de la biodiversidad— también muestra rasgos de innovación y eficacia alentadores.

1. La agenda “verde”: políticas en el campo de la biodiversidad

La cubierta forestal costarricense declinó de un 99% del territorio nacional en el momento de la conquista española, a un 72% en 1950 (Watson y otros, 1998). Para 1970, la aceleración de este proceso de deforestación había dejado sólo un 56% del país con cobertura forestal. Aunque ya desde la colonia hubo declaración de reservas forestales y, en 1955, las cimas de los macizos volcánicos nacionales fueron declaradas como áreas protegidas, la primera ley forestal en Costa Rica data precisamente del año 1969. Esta ley establecía un mejor fundamento jurídico para la creación y administración de áreas protegidas, aunque en su diseño general la ley se orientaba hacia el aprovechamiento agrícola, y el Departamento Forestal era una dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Además, el manejo de las reservas del Estado estaba en manos del Instituto de Tierras y Colonización, fundado en 1962 para adjudicar estas tierras estatales a campesinos necesitados.

Con la Ley Forestal de 1969, el sistema nacional de áreas protegidas —que ahora abarca un 25% del territorio nacional— empezó su proceso de formación, bajo el auspicio del Servicio de Parques Nacionales, adscrito también al Ministerio de Agricultura y Ganadería.

En 1979 se realizó el primer intento por esbozar una política forestal coherente para el país, con la promulgación de un Plan Nacional de Desarrollo Forestal bajo la Administración Carazo Odio (1978-1982). El plan contemplaba el desarrollo forestal en zonas de amortiguamiento y la reforestación en zonas designadas como de uso forestal; la extracción racional de madera, y el acceso a crédito y asistencia técnica para un uso más eficaz de la madera caída (Watson y otros, 1998).

Por su parte, la Administración Arias Sánchez (1986-1990) —que tuvo un importante papel regional como impulsora del Plan de Paz firmado en Esquipulas al final de 1987— también constituye un hito en el campo ambiental. En efecto, bajo la conducción del ingeniero Álvaro Umaña, esta administración crea en 1986 el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEM, el primero de su naturaleza en la región) y promueve otras acciones fundamentales para la historia subsiguiente, entre las más relevantes de las cuales se encuentra la elaboración de la “Estrategia de Conservación para el Desarrollo Sostenible de Costa Rica” (ECODES), promulgada en la XVII Asamblea General de la Unión Internacional para la Conservación (UICN), que se realizó en San José en el año 1988. ECODES es el primer intento por reconsiderar la orientación del proceso de desarrollo nacional desde una perspectiva integral, conjuntado lo económico y social con lo ambiental, en forma ampliamente concertada, con participación de un amplio espectro de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, académicas, gremiales y políticas. Es realmente con ECODES que el movimiento ambientalista costarricense adquiere carta de ciudadanía en el escenario político nacional.

La Ley Forestal de 1986 (No. 7032) adscribe al recién creado MIRENEM las dependencias estratégicas en la administración de la política forestal, el Servicio de Parques Nacionales y la Dirección General Forestal, anteriormente en el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Para ese entonces, el sistema de parques nacionales tenía un creciente reconocimiento internacional, lo cual permitió que a finales de los años 80 Costa Rica pudiera convertirse en uno de los países en realizar canjes de deuda pública por naturaleza. Este mecanismo le permitió al

país financiar su política de conservación, por un monto equivalente a \$36 millones en moneda local (cancelando \$75 millones de deuda).

También a finales de los años 80, el interés creciente en establecer una política nacional de biodiversidad, como tal, lleva a la creación del Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), como fundación sin fines de lucro con participación del gobierno y las universidades públicas. El INBio ha desarrollado desde su establecimiento una labor de investigación en su campo reconocida internacionalmente, y ensayado novedosos mecanismos de venta de servicios de bioprospección a empresas farmacéuticas y químicas de primer orden en el mundo, como la Merck, Sharpe & Dohme.

Sin embargo, el proceso de deforestación avanzó entre 1973 y 1989 a un ritmo anual de 16% en pérdida de cobertura forestal (de los más altos del mundo). Para 1990, se estimó que sólo un 39% del territorio nacional mantenía su cubierta forestal (Watson y otros, 1998). En respuesta, durante la Administración Arias, a finales de los años 80, se elabora el Plan de Acción Forestal para Costa Rica, buscando involucrar un amplio abanico de actores sociales en la construcción conjunta de una visión nacional sobre el papel del bosque en el desarrollo nacional. La política forestal adopta durante todo este período diversos esquemas de incentivos, que van desde las exenciones fiscales a inicios de los años 70 hasta la entrega de bonos y créditos forestales, para actividades tanto de protección como de reforestación, en los años 80.

Estos esfuerzos reciben un nuevo impulso con la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, en 1992. Costa Rica suscribe en Río la Convención Marco sobre Cambio Climático, así como la Convención de Biodiversidad, que reciben ratificación legislativa poco tiempo después. En 1994, la Administración Figueres Olsen (1994-1998) centra expresamente su política de gobierno en el desarrollo sostenible, impulsando en el ámbito regional la creación de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, de donde surge —entre otros organismos— el Consejo Centroamericano de Bosques y Áreas Protegidas. En el ámbito nacional, esta administración desemboca en cinco acciones estratégicas para el futuro de la biodiversidad y los bosques en el país: la reforma del artículo 50 de la constitución política, la promulgación de la nueva Ley Orgánica del Ambiente, el decreto ejecutivo de creación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y la promulgación de la nueva Ley Forestal de 1996 y la Ley de Biodiversidad de 1998.

La reforma al artículo 50 de la constitución política, establecida en 1994, es un paso que puede tener la mayor trascendencia en la futura configuración institucional del país. Frente al derecho constitucional a la propiedad privada, y en tensión con este derecho, la nueva reforma establece el derecho de la ciudadanía a “un ambiente sano”, limitando constitucionalmente la libertad de acción atribuida de previo al propietario privado. Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente (No. 7554, 1996) da contenido jurídico al nuevo principio constitucional, estableciendo la obligatoriedad de realización de estudios de impacto ambiental en todo proyecto de desarrollo, así como una secretaría técnica en el nuevo Ministerio de Ambiente y Energía (que se desprende así, bajo este nuevo nombre, de la cartera de Minas del antiguo MIRENEM) para regular y aprobar estos estudios. La nueva ley crea además instancias de consulta y participación local y regional para asuntos relacionados con el manejo de los recursos naturales, incluyendo el bosque, denominados *Consejos (Locales o Regionales) Ambientales*.

Mientras tanto, el decreto de creación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), promulgado en 1995, instituye la idea de unidades regionales de conservación, de la Administración Arias Sánchez, unificando el Servicio de Parques Nacionales, la Dirección General Forestal y el Departamento de Vida Silvestre bajo el mando del SINAC. El Sistema de Áreas de Conservación divide el país en once áreas desconcentradas para el manejo y protección de los recursos naturales, y crea un marco institucional para involucrar a las municipalidades y los organismos privados locales en el diseño y administración de estas políticas.

La nueva Ley Forestal de 1996 (No. 7575) prohíbe el cambio de uso en tierras con árboles³, garantiza un sistema de incentivos financieros para pequeños reforestadores (sobre la base de un nuevo impuesto a los combustibles fósiles), estimula la regeneración natural y el manejo del bosque natural, pero desregula considerablemente varias actividades estratégicas para la industria forestal —como el transporte, la industrialización de la madera, la forestería de plantación—, mientras descentraliza o privatiza el monitoreo de buena parte de la política forestal en su conjunto (Watson y otros, 1998). Se crea además una Oficina Nacional Forestal, como órgano de concertación de políticas forestales con representación del sector gubernamental y no gubernamental, incluyendo organismos de pequeños reforestadores y organizaciones conservacionistas. También se convierte al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal en un organismo semiautónomo con potestad para la administración de recursos para la actividad forestal. Quizá uno de los aspectos más novedosos de la nueva Ley Forestal es su reconocimiento de

³ Para ese entonces, el remanente de cubierta forestal en el país era de un 35% (Watson y otros, 1998).

compensación por la prestación de servicios ambientales derivados del bosque; entre éstos se explicitan los siguientes: fijación de carbono, conservación de biodiversidad, protección de fuentes de agua, protección de suelos y conservación de belleza escénica (Alfaro, 1997).

La nueva Ley de Biodiversidad, por su parte, establece un hito mundial, cuando su promulgación en abril de 1998 la convierte en el primer instrumento jurídico de su tipo a nivel internacional, instituyendo legalmente la función ambiental de la propiedad inmueble, con límites a los derechos del titular y condiciones a su uso o ejercicio (en *Ciencias Ambientales*, Nos. 13 y 14). La Ley se propone como objetivo integrar la conservación y el uso sostenible de los elementos de la biodiversidad en el desarrollo de políticas socio-culturales, económicas y ambientales, así como reconocer los derechos provenientes del conocimiento científico o autóctono de la biodiversidad. Como mecanismo institucional, se crea una comisión nacional para la gestión de la biodiversidad (con representación gubernamental y no gubernamental, incluyendo organismos campesinos, indígenas y ambientalistas), y se establece al SINAC como sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, integrando las competencias en materia forestal, de vida silvestre y áreas protegidas para dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos al logro de la sostenibilidad en el manejo de los recursos forestales del país. La participación regional y local se establece mediante el mecanismo de *Consejos (Regionales o Locales) de Áreas de Conservación*. El instrumento financiero más innovador para el SINAC es también, como en la nueva Ley Forestal, el pago por servicios ambientales, derivados de la conservación de áreas, cuyo cobro se autoriza a una serie de entes públicos o privados que venden servicios de agua o energía. Los beneficiarios de este pago son los dueños de las áreas bajo conservación.

2. La agenda “marrón”: políticas en el campo de la contaminación

Como se señala al inicio de esta sección, la modernización de los patrones de consumo de bienes finales y bienes intermedios en Costa Rica ha tenido un impacto notable en la generación de problemas de contaminación, por desechos sólidos y sustancias tóxicas, con impactos aún poco conocidos —pero preocupantes— en el suelo, el agua, el aire y, por supuesto, la salud pública.

La Gran Área Metropolitana de San José —que concentra la mayor parte de la población nacional— genera descargas sin tratamiento de aguas residuales y jabonosas residenciales, desechos de actividades industriales, aguas de procesos químicos, grasas, aceites e hidrocarburos, agroquímicos, residuos del beneficiado del café y desechos sólidos que bajan por la cuenca del Río Tárcoles hasta depositarse en el Golfo de Nicoya, principal fuente de alimentos marinos en Costa Rica. Según informes recientes del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN, 1998), evaluaciones de la cuenca revelan la existencia de “niveles avanzados” de coliformes fecales, metales pesados, nitratos, sólidos suspendidos y otras sustancias peligrosas para la salud. Problemas parecidos, aunque no tan graves, se presentan en otras cuencas de alta densidad poblacional en el país. Estudios aún preliminares evidencian, por otro lado, la existencia de graves riesgos de mediano plazo por contaminación de agroquímicos y desechos humanos en aguas subterráneas del Valle Central, donde se ubican las ciudades más pobladas, así como en otras zonas pobladas del país. Otros datos disponibles no son menos preocupantes: por ejemplo, se sabe que Costa Rica es el país latinoamericano con un mayor consumo de empaques desechables per cápita (MIDEPLAN, 1998). Instituciones oficiales nacionales han encontrado evidencia de daños genéticos en mujeres por exposición ocupacional a plaguicidas en plantas empacadoras de banano (*loc. cit.*), y se está investigando el hecho de que Costa Rica sea el país con mayor incidencia del cáncer gástrico en el mundo, junto con Japón.

Dos ejes fundamentales de política ambiental en este plano han sido en los últimos años los incentivos a la producción limpia, así como el control de emisiones y efluentes contaminantes (MIDEPLAN, 1998). En el primer eje, se ha propuesto el desarrollo de mecanismos de atracción para inversiones extranjeras con liderazgo en la responsabilidad ambiental, así como el diseño de sistemas para la certificación ambiental y de sostenibilidad (incluyendo componentes sociales de equidad). En este sentido, durante la Administración Figueres Olsen se dieron dos pasos de enorme relevancia nacional e internacional. El primero es la puesta en práctica de un mercado de venta de servicios ambientales por fijación de carbono, mediante el cual Costa Rica logró en 1996 —por primera vez a nivel internacional— una inversión de \$2 millones por parte de un consorcio privado noruego, monto que se canalizó en 1997 a programas forestales de pequeños y medianos productores. En cuanto a la política de certificación ambiental, a principios de 1998 la empresa Standard Fruit Company de Costa Rica, subsidiaria de la transnacional Dole, productora y exportadora de fruta tropical, logró que sus exportaciones desde Costa Rica obtuvieran la primera certificación ISO 14001 en el mercado internacional del banano, lo cual fortalece la posición de este producto costarricense en el nicho de consumidores con preocupacio-

nes ambientales (ver también el caso del Foro Emaús en la sección siguiente)⁴. Otros esfuerzos importantes en el campo de la certificación ambiental internacional se están desarrollando en la exportación del café y otros productos orgánicos, así como en la producción forestal bajo los parámetros del Forest Stewardship Council. El Instituto Costarricense de Turismo ha impulsado por su parte, con el concurso del MINAE, un programa denominado “Bandera Ecológica”, para otorgar una distinción oficial a empresas o comunidades (por ejemplo en sitios turísticos) que logran reducir el uso de insumos y la generación de desechos o emisiones contaminantes (MIDEPLAN, 1996).

En lo relativo al control de efluentes, se ha priorizado la contaminación agroindustrial, en el marco de un manejo integral de cuencas y recursos hídricos, así como el control de emisiones vehiculares y la eliminación de contaminantes en los combustibles. En cuanto al manejo integral de cuencas, una de las líneas de política ha sido la conformación de *comisiones de cuencas*: entes interinstitucionales con participación gubernamental, no gubernamental y local, para definir programas conjuntos de acción (MIDEPLAN, 1997). La más importante de estas comisiones —establecida en 1993— es la de la cuenca del Río Grande de Tárcoles, el más contaminado del país, aunque se han creado otras en fechas más recientes, sobre todo en el marco de las áreas de conservación (Arenal y Tempisque). Los principales componentes de la Comisión del Tárcoles son el ordenamiento territorial, inversiones en recursos hídricos, mitigación de la contaminación ambiental, fortalecimiento institucional y participación de la sociedad civil. De suma importancia en este marco ha sido un programa de control de efluentes por beneficiado de café iniciado en 1992, del cual se informa ha producido una reducción importante de contaminación por broza del café en la cuenca del Tárcoles. En cuanto a la contaminación aérea por emisiones vehiculares, se ha implantado la eliminación del plomo en la gasolina, así como un programa de revisión vehicular para controlar los niveles de emisión, y un impuesto al consumo de gasolina destinado a financiar actividades de interés ambiental.

⁴ Según Carlos Acevedo, gerente de asuntos ambientales y salud ocupacional de la Standard Fruit Company en Costa Rica, esta certificación —otorgada el 23 de febrero de 1998— establece el cumplimiento de la empresa con respecto a parámetros establecidos por la International Organization for Standardization (ISO) y la legislación costarricense en aspectos como la reducción del desperdicio y el consumo de recursos, la reducción o eliminación de contaminantes, la minimización de impactos ambientales y el aumento de la conciencia ambiental entre los trabajadores y funcionarios de la empresa (C. Acevedo, comunicación personal, 1998).

B. EVOLUCIÓN DEL AMBIENTALISMO EN COSTA RICA: CASOS RECIENTES

Como señalamos al inicio, los antecedentes de la política ambiental en Costa Rica en los últimos veinte años sirven de contexto para una aproximación más detallada a movimientos ambientalistas recientes que permiten examinar las cuestiones siguientes: ¿Qué semejanzas y diferencias presentan estos movimientos (en lo geográfico, lo ideológico y lo temático)? ¿Qué influencia recíproca revelan en relación con otros actores sociales? Finalmente, ¿cuál es su identidad, su papel social, proyección u aportes? ¿Han contribuido en la creación de un capital social ambientalista?

En principio, los estudios de caso seleccionados presentan en este respecto una gran diversidad, propicia para iluminar las cuestiones planteadas. Los tres casos son notables por el desarrollo de experiencias de articulación multisectorial, tanto a escala nacional como internacional, pero a partir de entornos geográficos (o unidades territoriales) y actores políticos distintos. Además, forman parte de los episodios recientes más notables en que se constituye y fortalece en Costa Rica el capital sociocultural ambientalista.

1. AECO en la Península de Osa: el revés de Stone Container⁵

El parque nacional de Corcovado, en la Península de Osa (provincia de Puntarenas, vertiente sur del Pacífico costarricense), es posiblemente el más importante de Costa Rica, considerando su gran biodiversidad endémica (es el único bosque lluvioso tropical en el Pacífico centroamericano) y el estado de vulnerabilidad en que se encuentra ante la amenaza de presiones antropogénicas, particularmente las actividades madereras.

En 1989 y 1992, la empresa Ston forestal, subsidiaria de la transnacional Stone Container, estableció acuerdos con dos gobiernos consecutivos, para establecer 24.000 hectáreas de *Gmelina sp.* en Costa Rica, sobre todo en el área de la Península de Osa, así como instalaciones industriales y portuarias. Estos acuerdos fueron revisados por una tercera administración en 1994 y principios de 1995, cambiando el sitio de las instalaciones industriales y portuarias desde el lugar previsto inicialmente, en la zona del Golfo Dulce (que amenazaba la biodiversidad de la Península de Osa) a otra localidad cercana al puerto de Golfito, beneficiando a la población

⁵ Esta sección se basa en van de Hombergh (1998) y Fernández-González (1999).

local. Nuevas cláusulas se añadieron al convenio de 1989, estipulando las obligaciones de la empresa en lo relativo al monitoreo ambiental de sus actividades, así como sus responsabilidades legales e imputabilidad en caso de daños ambientales originados en sus plantaciones o instalaciones industriales.

Este giro de 180 grados en los acuerdos entre la compañía y el gobierno costarricense fue posible como consecuencia de una campaña ambientalista que en 1993 y 1994 logró un cambio fundamental en el proyecto de Stone Container. Aunque el carácter pluralista del Estado costarricense también jugó un papel medular, resultó crucial la presión de un movimiento ambientalista muy activo y estratégicamente consciente, bajo la conducción de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO). El movimiento, que recibió un gran apoyo internacional (incluyendo la visita de un barco de la organización Greenpeace), tuvo un desenlace dramático: el 7 de diciembre de 1994, después de recibir amenazas anónimas durante la campaña, tres dirigentes de AECO murieron en un incendio doméstico cuyas causas aún se desconocen, seis semanas después de alcanzarse un nuevo acuerdo entre el gobierno y la empresa transnacional; unos meses después falleció un cuarto dirigente del grupo, en circunstancias confusas.

Tres instituciones estatales participaron como intermediarias en la negociación de un nuevo convenio con la Stone Container. Una de ellas fue la Contraloría General de la República (CGR), organismo autónomo auxiliar de la Asamblea Legislativa. Cuando fue requerido por los dirigentes ambientalistas, el Contralor se apegó a su rol constitucional de auditar la legalidad de los contratos gubernamentales en resguardo del interés público. En setiembre de 1994, en un revés trascendental y decisivo para el contrato que en 1992 le otorgó a la transnacional el derecho de construir instalaciones portuarias en el Golfo Dulce (bajo el régimen de zona franca), la CGR desaprobó el contrato, oponiéndole las obligaciones estatales derivadas de la enmienda al artículo 50 de la Constitución Política, que estableció en junio de 1994 el derecho a un ambiente sano, y otras obligaciones ambientales internacionales adquiridas por Costa Rica como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo en 1992.

Una segunda institución intermediaria fue la Defensoría de los Habitantes, creada en 1993. Dos semanas después de la recusación de la Contraloría contra el contrato de 1992, la Defensoría hizo lo mismo, criticando el establecimiento de una zona franca con una evaluación de impacto ambiental (EIA) *ex post*, en un área que formaba parte de la Reserva Forestal Nacional de Golfo

Dulce. Tanto la CGR como la Defensoría de los Habitantes censuraron la EIA existente por ser incompleta, insuficiente e inadecuada.

Esta primera EIA fue presentada inicialmente a finales de 1993 por la subsidiaria de la Stone Container a un tercer organismo intermediario en este drama: la Comisión Interinstitucional de Control y Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental (CIEIA), creada en marzo de ese mismo año por el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEM). La SETENA aprobó la EIA a principios de 1994, pero la nueva administración Figueres Olsen, que asumió el poder en mayo de ese año, enfrentó una escalada de presiones de la campaña ambientalista, tanto a escala local (desde organizaciones comunitarias y gobiernos municipales en la Península de Osa hasta una coalición ambientalista nacional) como de origen internacional. Fue en este contexto que se tomó la decisión de negociar un nuevo convenio con la transnacional.

Se creó una comisión ejecutiva con participación de los diversos actores sociales interesados, que finalmente logró un acuerdo fundamentalmente distinto con Stone Container. Una nueva Comisión Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (CONEIA) se estableció en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE, que sucedió al MIRENEM a partir de la administración Figueres Olsen), sustituyendo a la anterior CIEIA e integrada con representantes de las universidades y la sociedad civil. Además se constituyó una comisión de seguimiento y monitoreo, específicamente en el marco del acuerdo con Stone Container. Sin embargo, el establecimiento de esta nueva comisión tuvo un atraso de dos años, y no llegó a ser hasta que la CONEIA se transformó nuevamente, al aprobarse en 1995 la nueva Ley Orgánica del Ambiente, que creó la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) como dependencia del MINAE, con un carácter exclusivamente técnico y sin representación no gubernamental. Una puerta se abrió pero volvió a cerrarse.

Como se dijo arriba, la posición de la Contraloría y la Defensoría de los Habitantes frente a los acuerdos de 1989 y 1992 con la subsidiaria de Stone Container marcó un viraje en esta historia. Pero la iniciativa y el ímpetu crucial de todo el episodio vinieron del movimiento ambientalista. Sus líderes tuvieron la capacidad de construir sobre el capital sociocultural existente — localmente, en la Península de Osa, nacionalmente, en Costa Rica, y a escala internacional— para promover una coalición triunfante, aunque efímera.

La campaña para reformar la posición inicial de Stone Container en Costa Rica alcanzó una victoria táctica, pero aún no se ha ganado la batalla. A finales de 1998, Stone se fusionó comercialmente con la Jefferson Smurfit Corporation para enfrentar el reto de la recesión en el mercado mundial del papel, y sus operaciones en Costa Rica se encuentran suspendidas. Queda por verse si el acuerdo de 1995 recibirá seguimiento y evaluación, en el momento en que comience la actividad de las instalaciones industriales y portuarias.

2. El Foro Emaús: por una agricultura sostenible en la vertiente norte del Caribe⁶

A finales de la década de 1980, varias empresas bananeras transnacionales y el gobierno costarricense decidieron reiniciar la producción y exportación de esta fruta en las llanuras de la vertiente norte del Caribe (provincias de Heredia y Limón), abandonadas desde los años treinta como consecuencia de la baja productividad de estas tierras.

En pocos años, las plantaciones de banano en la zona se extendieron de 35.000 a 51.000 hectáreas. Los impactos ambientales y sociales fueron numerosos. Los plaguicidas utilizados en la producción bananera llegaron a representar un 35 por ciento de las importaciones totales, alcanzando una cifra de 40 kilogramos por trabajador al año (frente a un promedio de 16 kilogramos en el resto de Centroamérica). Miles de hectáreas de bosques primarios y secundarios fueron destruidos, y la producción bananera comenzó a generar 2,5 kilogramos de desechos por kilogramo exportado (fruta descartada, bolsas, cuerdas y recipientes plásticos, entre otros). Además, las condiciones laborales se deterioraron rápidamente: los sindicatos enfrentaron la competencia de organizaciones no sindicales impulsadas por las compañías, los dirigentes fueron expulsados y —en medio de una alta migración ilegal desde la cercana Nicaragua— la fuerza de trabajo alcanzó un total de 80.000 personas, con sólo una quinta parte de ella empleada, y ello sólo en posiciones inestables y cambiantes. Los salarios decrecieron y los inmigrantes ilegales extranjeros no tenían acceso a los beneficios del sistema costarricense de seguridad social. La drogadicción y la violencia doméstica crecieron tremendamente, y aumentaron los impactos sanitarios —tanto agudos como crónicos— de la contaminación agroquímica.

El Vicariato Apostólico de Limón, organismo de la Iglesia Católica en la provincia donde se estableció la mayor parte de las nuevas plantaciones, publicó en 1989 una carta pastoral denun-

⁶ Esta sección se basa en Boyce y otros (1994) y FAPP (1997).

ciendo los impactos sociales y ambientales de la nueva producción bananera, y en 1990 promovió la creación del Foro Emaús (así llamado en honor del nombre de la casa pastoral del Vicariato en la provincia), incluyendo una gran diversidad de organismos de la sociedad civil: grupos eclesiales, sindicatos y organizaciones ambientales. La carta pastoral misma no fue escrita (como sucede comúnmente) por la jerarquía de la Iglesia o sus asesores, sino a través de un proceso de consulta y debate con organizaciones de base en toda la provincia. Esta posición de la Iglesia fue inicialmente muy combatida por los medios de comunicación conservadores y por las compañías bananeras mismas.

A mediados de 1992, mientras los productores de la zona enfrentaban una crisis originada en la disputa por los mercados de exportación y problemas de sobreoferta, el Foro Emaús dio nuevos bríos al debate público sobre el tema, conduciendo importantes marchas de protesta en San José, la capital del país, y presentó al presidente de la nación y a la Asamblea Legislativa varias propuestas de ley sobre normas ambientales, ordenamiento territorial y asuntos laborales.

Mientras el gobierno respondía inicialmente menoscabando las propuestas del Foro Emaús, con el argumento de que eran inoportunas e inconvenientes, los productores bananeros decidieron crear una comisión ambiental, y establecer un código de conducta ambiental. Como se adelanta en una sección anterior, las compañías se comprometieron con prácticas adecuadas de manejo de desechos, una reducción en la contaminación de efluentes, mayores controles sobre el uso de agroquímicos, mejoras en el cuidado de los suelos y el freno de nuevos proyectos en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas. En este marco se desarrollaron diversas iniciativas de “ecoetiquetado” en la provincia, incluyendo inicialmente las marcas *Eco-OK* y *Banano Amigo*. En 2000, las plantaciones de la Standard Fruit Company (dueña de Chiquita Brands) en Limón fueron las primeras a escala mundial en recibir la certificación ISO 14001 (CBI, 2001)⁷.

Por su parte, el Foro Emaús ha fortalecido sus recursos institucionales, con importantes instalaciones y equipo de trabajo tanto en la provincia de Limón como en la ciudad de San José, y publica en la actualidad una revista mensual sobre cuestiones relacionadas con la contaminación agroquímica a escala nacional. Sobre la “ambientalización” de las empresas bananeras en

⁷ Posteriormente, la transnacional decidió adoptar en sus operaciones mundiales los parámetros de certificación propuestos por la organización Rainforest Alliance en su *Better Banana Project*; actualmente, sus 119 fincas en ocho países (Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Filipinas y Estados Unidos) están certificadas (CBI, 2001, 2002). Costa Rica tiene un 26 por ciento del área total certificada, con un 26 por ciento, seguida por Panamá y Ecuador, con un 22 y un 13 por ciento, respectivamente (Rainforest Alliance, 2003a).

Costa Rica, inicialmente argumentó que la comisión ambiental bananera excluía a los sectores no empresariales, hecho que no cambió hasta el término de la comisión un tiempo después. Además, el Foro sostiene que el componente de plaguicidas de la producción bananera no ha cambiado, y que las condiciones laborales tampoco han mejorado. En la actualidad, la coalición está involucrada en el movimiento mundial de “comercio justo”, y está desarrollando estándares más integrales para el ecoetiquetado en Costa Rica, que incluyan cuestiones tanto sociales como ambientales.

3. ¿Agua que no has de beber? Hacia una nueva visión de los recursos hídricos en Costa Rica

Como consecuencia del crecimiento demográfico y la expansión de los asentamientos humanos y diversas actividades económicas en todo el territorio nacional, en el marco de profundas debilidades institucionales y jurídicas, en los últimos diez años los conflictos por la calidad y disponibilidad del agua han aumentado de tal forma que, para 2002, un 72 por ciento de la población nacional consideraba que el problema ambiental más serio en el país era la contaminación del agua (Unimer, 2002). Y aunque el agua es abundante (se ha empezado a exportar en los últimos años), regiones estratégicas en la economía nacional —como la Gran Área Metropolitana (GAM) de San José y la zona costera de turismo internacional en Guanacaste— están empezando a enfrentar problemas de disponibilidad; en la GAM, por ejemplo, la demanda en el período 1990-2001 superó en seis a nueve veces lo estimado, y en lo relativo a las aguas subterráneas, que abastecen más de la mitad del consumo metropolitano y a dos terceras partes de su población, la tasa de extracción sobre el caudal disponible pasó de un 16 a un 63 por ciento (constituyendo un nivel alto de “estrés” hídrico, según parámetros de la Organización Meteorológica Mundial, semejante al de países desérticos como los del Oriente Medio y la Península Árabe) (Fernández-González y Gutiérrez-Espeleta, 2002; MINAE y PNUMA, 2002).

Costa Rica muestra, a escala latinoamericana, elevados parámetros de acceso al agua potable —un 94,99 de la población—, aunque no así a los servicios de saneamiento: sólo un 4 por ciento de los efluentes de alcantarillado reciben algún grado de tratamiento (OPS y OMS, 2001). Pero los problemas de acceso se agudizan en algunas zonas del país, por bajas tasas de precipitación relacionadas con factores climáticos estacionales, y por la alta demanda de agua para consumo turístico. Este es el caso del golfo de Papagayo en la provincia de Guanacaste (ver-

tiente del Pacífico norte), donde cadenas internacionales —como Barceló y Meliá, de origen español— y otros consorcios están impulsando extensos complejos de turismo “de playa y sol”, de alto consumo, en cuencas que tienen los índices de precipitación más bajos en el país, altas tasas de evapotranspiración y, en consecuencia, muy bajas tasas de recarga de acuíferos (Fürst y Hein, 2002; FEDEAGUA, 2002). Líderes de la comunidad de Lorena, con el apoyo de una organización local de tutela de los derechos ciudadanos, la oficina de pastoral social de la Iglesia Católica y la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECÓN), han impugnado las concesiones de agua otorgadas al grupo Meliá y sus socios en Costa Rica, movilizándolo a un total de trece comunidades de la costa bajo el amparo del derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente integrado (*La Nación*, 2002b; Castro y Rojas, 2002; ACG, 2003a, 2003b; FECÓN, 2003). Dos decisiones de la Sala Constitucional —máximo órgano de apelación y amparo en la tutela de los derechos que establece el ordenamiento jurídico nacional—, favorables a las comunidades, así como el reconocimiento internacional a su principal dirigente (una maestra de la escuela pública en Lorena, que la fundación suiza “Cumbre Mundial de la Mujer” premió en 2002 por su liderazgo en este caso), no han sido suficientes para terminar con las pretensiones de las empresas hoteleras, por lo cual las comunidades afectadas continúan con un proceso de movilización y protesta en varios frentes. Una respuesta importante de las instituciones públicas involucradas (el Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento) es su interés por crear alguna figura institucional de carácter local, *ad hoc*, para administrar con participación de las comunidades, las empresas hoteleras y otros usuarios, las concesiones de aguas subterráneas en la zona (C. Romero, SENARA, comunicación personal).

Pero es en lo relativo a la contaminación de los recursos hídricos, y no al problema de su disponibilidad, donde se han generado en Costa Rica los principales conflictos por el agua. Una de las manifestaciones más dramáticas de la inseguridad ambiental que ello revela ocurrió en 1992, cuando un joven de la comunidad de Miramar (provincia de Puntarenas, vertiente del Pacífico norte) decapitó a tres pescadores artesanales que venían usando tóxicos para la captura del camarón en el río Guacimal, y envenenaban así el agua que tomaban los vecinos (Boyce y otros, 1994; Fernández-González y Gutiérrez-Espeleta, 2002; MINAE y PNUMA, 2002). Ese mismo año, el Tribunal Internacional del Agua en La Haya (Holanda), no gubernamental, aceptó evidencia preliminar de contaminación agroquímica del río La Estrella y acuíferos asociados (provincia de Limón, vertiente del Caribe sur) por parte de la transnacional bananera Standard

Fruit Company, conminándola a prevenir estos impactos mediante el uso de tecnologías e insumos alternativos; el alegato fue presentado por una organización no gubernamental incorporada en el movimiento que articuló el Foro Emaús (ver la subsección anterior) (Bogantes, 1992).

Desde una perspectiva jurídica, quizá el caso exitoso más notable en lo referente a la contaminación hídrica es la demanda planteada por un grupo de vecinos de San Lorenzo de San Rafael de Tarrazú (provincia de Cartago, valle intermontano central) en 1997, contra un caficultor local que deforestó la zona de protección y contaminó con agrotóxicos la fuente utilizada por la comunidad para abastecerse de agua (PNUMA, 2000; Fernández-González y Gutiérrez-Espeleta, 2002; MINAE y PNUMA, 2002). Treinta familias enfermaron y diez personas fueron hospitalizadas. Dos años después de iniciado el proceso judicial, en 1999, el Tribunal de Cartago resolvió la querrela interpuesta a nombre de los vecinos por la Fiscalía Ambiental (creada en 1993 por el Poder Judicial), condenando al demandado a cumplir tiempo de cárcel y el pago de una indemnización. De gran trascendencia en los resultados es que el juez aceptara como prueba el testimonio de funcionarios del Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) sobre la causalidad imputable al caficultor.

Otros conflictos locales semejantes no han corrido igual suerte, creando graves dudas sobre la eficacia de la institucionalidad costarricense en este campo, y poniendo de relieve el reto — aunque (veremos) también la oportunidad— de transformaciones profundas. El *impasse* más revelador se relaciona con varias fuentes en los cantones colindantes de Poás y Alajuela (provincia de Alajuela, valle intermontano central), particularmente las de La Chayotera, contaminadas por agrotóxicos utilizados por empresas productoras de helechos para la exportación (Fernández-González y Gutiérrez-Espeleta, 2002; MINAE y PNUMA, 2002; TCA, 2000; Sobrado, 2001a, 2001b).⁸ Las fuentes de La Chayotera —entre las más caudalosas del país, abasteciendo a 400 mil personas (incluyendo la capital provincial)— se encuentran, según el ICAA, en punto de alerta por concentración excesiva de nitratos, superando el valor recomendado y cerca o por encima del valor máximo admisible. Desde 1994, grupos vecinales, organizaciones no gubernamentales y especialistas universitarios han venido impulsando gestiones diversas para detener el uso de agrotóxicos cerca de las fuentes y proteger sus zonas de recarga: estudios técnicos nacionales e internacionales; solicitudes y denuncias ante las municipalidades, los mi-

⁸ Costa Rica es el principal exportador mundial de helechos, aunque sólo un 17 por ciento de esta producción está certificada como "sostenible" por parte de la organización Rainforest Alliance (2003b).

nisterios de Salud y Ambiente, y la Defensoría de los Habitantes; finalmente, recursos de amparo ante la Sala Constitucional (de parte tanto de los vecinos como de los dueños de las empresas). El aparente callejón sin salida se alcanzó cuando esta instancia del Poder Judicial pronunció sentencia en 2000 y 2001 mandando cerrar las instalaciones contaminantes, y sin embargo el dictamen no se cumple. El reto institucional planteado se evidencia en el clamor de uno de los abogados de las comunidades en esta disputa: “¿Quién nos va a defender entonces de un capitalismo desbocado, que amenaza la principal fuente de vida de toda la población?” (Sobrado, 2001a).

La gravedad de este reto se elevó al proscenio de la política nacional con el episodio de contaminación masiva del agua potable ocurrido en la Gran Área Metropolitana de San José en julio de 2001 (que se reiteró —con menor gravedad pero en forma alarmante, debido a la recurrencia del hecho— en abril de 2003) (La



Nación, 2001, 2002a, 2003; CNA, 2002; Alvarado Zeledón y otros, 2003). En cuatro días a mediados de julio de ese año, 7.710 personas debieron recibir atención médica por diarreas y vómitos al sur y oeste de la capital, provocados según las autoridades sanitarias por transmisión hídrica de gérmenes patógenos; paralelamente, el agua de otros sectores capitalinos al norte y el este, que abastecía 200 mil personas más, fue contaminada con hidrocarburos y posiblemente también por agentes patógenos, debiendo recomendar las autoridades abstenerse de consumirla durante esos días. En el caso de la contaminación por agentes patógenos en el sur y oeste capitalino, las autoridades descubrieron —dos semanas después— que una de las principales empresas de extracción de piedra de río en el país, después de 50 años de explotar canteras en la margen izquierda del río Virilla (que atraviesa la capital del noreste al suroeste), y sin los controles públicos que impone la legislación nacional, había irrespetado el área de protección del acuífero Colima superior en varias fuentes que abastecen a 250.000 personas del área metropolitana, exponiéndolas a las aguas del río, contaminadas en grado crónico y severo, según las autoridades.

A principios de agosto, el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) ordenó el cierre de la explotación; seis semanas después, el gobierno nombró una Comisión Nacional de Aguas para evaluar lo sucedido, la cual responsabilizó a las instituciones públicas por su descoordinación y falta de controles e inversión en la infraestructura necesaria. Aunque muchas de las principales recomendaciones técnicas no se habían implementado un año después, particularmente en lo relativo a la protección de las fuentes afectadas, dos de ellas —de gran trascendencia— sí tomaron impulso: el diseño de una política de Estado (no meramente de gobierno) en el campo hídrico, y —en particular— la producción de la legislación comprensiva que semejante política implica. El MINAE tomó la iniciativa de elaborar un proyecto de ley de recursos hídricos, aceptada para discusión en la Asamblea Legislativa en enero de 2002, para establecer —según su preámbulo— “una gestión integral del recurso hídrico, tomando como unidad de planificación la cuenca hidrográfica dentro de un marco de coordinación interinstitucional, que promueva un modelo de desarrollo humano sostenible con equidad de género, que asegure a las presentes y a las futuras generaciones la disponibilidad del agua en cantidad, calidad, oportunidad y precio justo” (*La Gaceta*, 2002). Una semana después, la Defensoría de los Habitantes presentó un segundo proyecto de ley, y en marzo de ese año, un diputado de la bancada de izquierda presentó una tercera propuesta. Paralelamente, en setiembre de 2001, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECÓN), que agrupa a 26 organizaciones ambientalistas del todo el país, creó un grupo de trabajo sobre el tema del agua, produciendo un conjunto

de principios para la gestión del recurso hídrico y promoviendo un movimiento de crítica de la propuesta de ley del MINAE (por “centralista y excluyente”), mediante foros de discusión en varias partes del país. Otras instituciones y organizaciones sociales iniciaron procesos semejantes de análisis de la situación en el campo hídrico.

En este marco de diversidad y discrepancia, la Asamblea Legislativa decidió aceptar una sugerencia de la filial centroamericana de la Asociación Mundial del Agua, con sede en Costa Rica, para integrar los tres proyectos de ley mediante un proceso de consulta a escala nacional, que se desarrolla a partir de la siguiente administración (2002-2006), con el apoyo del MINAE, diversas organizaciones ambientalistas y, con vaivenes, de la FECÓN como tal. Por primera vez en Costa Rica, una propuesta de legislación en el campo ambiental se somete a una discusión de tanta amplitud geográfica e institucional, pública y privada, creando condiciones para una repercusión inédita en la sensibilización ciudadana frente al tema posiblemente más integrador en la relación ambiente-sociedad. Además, en una muestra de buena fe y apoyo a las iniciativas ambientalistas en este campo, el presidente Abel Pacheco ha establecido por decreto (en junio de 2002), junto con el Ministro del Ambiente, los principios propuestos por FECÓN para la gestión del agua: entre otros, el acceso al agua como derecho inalienable, su carácter de dominio público y su función ecológica, y la necesidad de una gestión integrada, descentralizada, participativa, equitativa y solidaria (social e intergeneracionalmente).

C. CONCLUSIÓN (PROVISIONAL) Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

En esta sección final esbozamos una conclusión tentativa que retoma los cuestionamientos planteados al inicio, intenta dilucidarlos en lo relativo a la situación bajo análisis y esboza algunos elementos fundamentales para el estudio futuro de la cuestión ambiental en Costa Rica.

1. Identidad y estrategia del ambientalismo en Costa Rica

Los casos analizados presentan a primera vista una gran diversidad geográfica, temática e ideológica, aunque en una segunda mirada pueden vislumbrarse semejanzas o convergencias que conviene igualmente destacar.

Lo geográfico y lo temático: paisajes, economías locales, problemática ambiental

En lo geográfico, las diferencias en los paisajes y las economías locales son notables: la experiencia de AECO en el único bosque tropical húmedo remanente en el Pacífico centroamericano; el movimiento del Foro Emaús en un paisaje originalmente —también— de bosque tropical húmedo, pero del Caribe, y convertido desde la década de 1930 en llanuras con plantaciones bananeras; finalmente, en el caso de Lorena, un movimiento en paisaje de bosque tropical seco, del Pacífico, igualmente convertido en llanuras ganaderas desde el siglo XIX, con el trasfondo de un movimiento por el agua que atraviesa toda la geografía nacional.

En lo temático, este condicionamiento de los paisajes y las economías locales determina grandes diferencias en los fines específicos de los movimientos analizados: la forestería sostenible (AECO), la agricultura sostenible (Emaús) y el acceso al agua (Lorena); en lo relativo al movimiento nacional por la legislación sobre recursos hídricos, preocupan los usos del agua y su asignación eficiente y equitativa entre usuarios. Sin embargo, los temas mencionados presentan una convergencia subyacente relacionada con los dilemas de la conservación y el desarrollo bajo un modelo —como el costarricense— de inserción muy abierta en la economía internacional; en efecto, en los casos de AECO, Emaús y Lorena, vemos perfilarse tres actividades económicas en manos de actores extranjeros poderosos: la Stone Container, empresas bananeras (de origen estadounidense o europeo, fundamentalmente) y grandes cadenas hoteleras españolas. En el caso de la legislación por el agua, en cambio, las tensiones ambientales que originan el movimiento se relacionan con una dinámica más endógena de la actividad económica y sociodemográfica.

Lo político-ideológico: ecosocialismo, comunitarismo, pluralismo

En el campo de lo ideológico (que a su vez se relaciona estrechamente con el de la identidad, como veremos abajo), los casos analizados presentan varias configuraciones que aquí apenas se señalan esquemáticamente. El movimiento de AECO presenta en su núcleo inicial una corriente que podemos codificar como “ecosocialista” (es decir, de socialismo ecologista; ver Ruha, 1988, en Martínez-Alier, 1991), que se combina con otra corriente “comunitarista” (es decir, centrada en demandas y necesidades de las comunidades locales, en una perspectiva de desarrollo también local, no nacional), que presentan las organizaciones y líderes locales. A

este núcleo se fueron añadiendo corrientes conservacionistas de organizaciones no gubernamentales de escala nacional e internacional (como Greenpeace).

En el caso del Foro Emaús, el ímpetu inicial del movimiento se origina en el catolicismo social del Vicariato Apostólico de Limón, sus párrocos y otros animadores de la pastoral social, que crearon comunidades eclesiales de base en esta zona desde los años 80. Otra corriente fundamental es la del sindicalismo bananero, cuyas organizaciones fueron perseguidas y muy debilitadas en la década de 1990. Sobre esta base se añadieron otras organizaciones e intelectuales ambientalistas, abriendo el movimiento a una visión más nacional e internacional de la problemática de los agrotóxicos en la agricultura bananera.

El caso de Lorena se emparenta ideológicamente con el del Foro Emaús por el influjo de la pastoral social católica (aunque corresponda a otra unidad administrativa eclesiástica, la diócesis de Tilarán, con una historia muy distinta a la del Vicariato de Limón); muchos de sus líderes son parte del clero. Sin embargo, también se articula en este movimiento una corriente comunitarista, basada un liderazgo local de maestros y otros sectores de pequeña burguesía rural (comerciantes, pequeños y medianos agricultores).

Finalmente, el movimiento nacional por una nueva ley del recurso hídrico articula fundamentalmente un abanico ideológico pluralista aunque sesgado hacia el conservacionismo, basado en intelectuales y profesionales de las instituciones públicas relacionadas con el sector, y organizaciones no gubernamentales ambientalistas. Tiene dos particularidades notables —en contraste con sus dos principales antecedentes en el campo de la legislación ambiental costarricense: la ley forestal de 1996 y la ley de biodiversidad de 1998 (véase la primera sección de este estudio)—, y es, en primer lugar, el que abarca todo el territorio nacional, y, en segundo lugar, el haberse sometido a un proceso de consulta en todo el país con participación de organizaciones no gubernamentales y locales cercana al 40 por ciento (semejante a la del sector público) (Alvarado Zeledón y otros, 2003).

Influencia recíproca: capacidad de agencia, estrategia, identidad, incidencia

La pregunta por la influencia recíproca entre actores sociales dentro de los movimientos bajo análisis permite asomarse a la cuestión de la capacidad de agencia de los sectores involucrados, así como su papel social o proyección, en lo relativo a las estrategias y también las

identidades —ya no teóricas o ideológicas, sino prácticas (de hecho)— de estos actores. En efecto, la influencia puede verse como una función del *poder* —o capacidad de agencia— que ostentan, pero también de la estrategia, ya que un poder sin estrategia adecuada puede resultar ineficaz, en definitiva, no obstante su potencial de principio. Y la estrategia depende, finalmente, de la visión teórica de los actores implicados, pero también de su expresión práctica en acciones concretas; es decir, de su identidad efectiva.

En este plano, podemos concluir que los movimientos analizados muestran una capacidad de los actores involucrados para articularse en forma multisectorial en procesos de varios años, logrando éxitos importantes (ya reseñados), a escala tanto local como —en los casos de AECO, Emaús y el proceso de ley de aguas— nacional e internacional. En el caso de Lorena, es manifiesta su articulación internacional incipiente reflejada en el premio de la Fundación “Cumbre Mundial de la Mujer”, pero el caso aún no ha desarrollado derivaciones de impacto nacional evidentes.

En el caso de AECO en la península de Osa, le competió poner en acción una institucionalidad ambiental de reciente creación (la reforma del artículo 50 de la Constitución Política, la Ley Orgánica del Ambiente y sus instituciones asociadas, la Defensoría de los Habitantes), creando antecedentes importantes en términos de la negociación de condiciones ambientales para la inserción de empresas transnacionales, por parte de las autoridades de gobierno. El caso del Foro Emaús es más significativo en el campo de la institucionalidad ambiental relativa a la actividad campo empresarial; en efecto, su confrontación con las empresas bananeras indujo cambios importantes —si bien, acaso, no con toda la profundidad y extensión necesarias— en las prácticas productivas de estas empresas, más allá de lo exigido por la legislación nacional vigente. Por su parte, el movimiento de Lorena contra la utilización abusiva del agua en la gran industria hotelera aún no ha tenido repercusiones de esta naturaleza, pero los dictámenes favorables de la Sala Constitucional han fortalecido la jurisprudencia en este campo, y la eventual conformación de una institucionalidad local *ad hoc* para la gestión equitativa del recurso sería un hito en el desarrollo del manejo de los recursos naturales en Costa Rica. Finalmente, el movimiento por una nueva ley de recursos hídricos ya ha logrado crear un procedimiento nuevo para la consulta y participación pública a escala nacional, que amplía y profundiza en forma inédita el potencial educativo, de sensibilización y de creación de *conciencia ambiental holística* en el país.

2. Evolución del capital sociocultural ambientalista⁹

Una dimensión analítica fundamental se pone de relieve en las observaciones que anteceden: la dinámica de apropiación, recreación y redistribución del capital sociocultural ambientalista que subyace fenómenos como los analizados.

Siguiendo a Paul Ricoeur (1996), puede pensarse que la política —en su sentido originario, o *poder-en-común*— es el ejercicio del poder para la satisfacción mancomunada de necesidades humanas fundamentales (según Max-Neef y otros, 1986: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, identidad, ocio, creación, libertad, trascendencia). Para el logro de estos fines compartidos (este *bien común* aristotélico), la relación entre sujetos implica un proceso de coordinación y adecuación recíproca cuya generalización cristaliza en reglas y normas (Mead, 1967, 1981; Ostrom, 1997). Si —con Poulantzas (1979)—, las reglas de propiedad, posesión o control de recursos productivos son determinantes del modo de producción, en la medida en que constituyen la capacidad de asignar, disponer, dominar y explotar los medios de producción y el proceso de trabajo, siguiendo a Bourdieu (1986) podemos concebir la posesión o control de diversas formas de capital —económico, cultural y social— como determinante, a su vez, en la definición de posiciones y capacidades de agencia en sus respectivos campos sociales. La apropiación del capital en cualquiera de sus formas puede verse, entonces, como un mecanismo de *empoderamiento* (Montoya, 1999).

Dos formas de capital nos interesan para analizar esta dimensión de la política ambiental en Costa Rica: el capital “cultural” que, siguiendo a Bourdieu (1977, 1979, 1980, 1985, 1986) pero desarrollándolo con los aportes de Ostrom (1997, 1998, 1990; Ostrom y otros, 1993, 1994), se materializa en reglas e instituciones, y el capital “social”, relacionado con los “recursos actuales o potenciales vinculados con la posesión de una *red duradera de relaciones* más o menos institucionalizadas de interconocimiento e interreconocimiento; o, en otros términos, con *la pertenencia a un grupo*, como conjunto de agentes que... están también unidos por *relaciones* permanentes y útiles” (Bourdieu, 1980). Dado que las redes sociales mismas pueden concebirse como *instituciones* que se constituyen a partir del funcionamiento de un conjunto determinado de reglas, hablamos aquí de capital *sociocultural*, integrando y ampliando el enfoque de Bourdieu.

⁹ Este apartado se basa en Fernández-González, 2003a.

La política ambiental costarricense puede entonces analizarse como una dinámica que parte de un capital sociocultural acumulado, cuya evolución reciente puede visualizarse en términos de su apropiación, recreación y eventual redistribución en un campo que oscila políticamente entre la cooperación y el conflicto (Laclau y Mouffe, 1987). El caso del agua —y en particular, del debate sobre la creación de nuevas políticas y, en definitiva, de una nueva institucionalidad en este campo— resulta particularmente ilustrativo de esta dinámica. Tiene, además, una enorme productividad, dada la transversalidad económica, ecológica y cultural de los recursos hídricos, sustento y eje integrador de muchísimas facetas de la actividad humana.

Para profundizar en este caso, parece necesario revisar la historia y el papel del agua en la cultura ambiental costarricense, en una perspectiva de largo plazo, que permita visualizar más claramente, en escorzo, los retos y potencialidades del momento actual. Una herramienta analítica fundamental para lograrlo será la interpretación del sentido que semejante historia ha llegado a tener para la sociedad costarricense. Una hermenéutica de la práctica simbólica ambientalista —en el sentido abierto por Ricoeur y Mead—, nos permitiría conocer la relación que establece la dinámica política ambiental entre el ejercicio del poder, la resolución (o no) de conflictos, las identidades que se forman y transforman en este proceso, y la naturaleza de los proyectos y estrategias que explican este devenir.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- Alfaro, M., 1997: “¿Cómo cuantificar el carbono fijado en los proyectos de implementación conjunta?”, *Ambien-Tico* (Universidad Nacional, Costa Rica), No. 53, Agosto, pp. 5-10.
- Alvarado Zeledón, X., S. Avendaño Mata, C. Blanco Obando, G. Rodríguez Villalobos, 2003: *Análisis de política pública con relación al proyecto de Ley del Recurso Hídrico en Costa Rica: El acceso al agua como derecho ciudadano*, Memoria de Seminario de Graduación para optar por el grado académico de Licenciatura en Sociología, Universidad de Costa Rica, mayo (borrador inédito).
- Bogantes, J., 1992: *Caso de la cuenca del río La Estrella, Costa Rica, presentado ante el Tribunal Internacional del Agua (extracto)*, ADCH (Asociación para la Defensa de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica y por Aguas Limpias), Fundación Guilombé, Ámsterdam.
- Bourdieu, P., 1986: “The forms of capital”, en J. G. Richardson (editor): *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, New York: Greenwood Press, pp. 241-258.

- , 1985: "The social space and the genesis of groups", *Social Science Information*, Vol. 24, No. 2, pp. 195-220.
- , 1980: "Le capital social", *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, No. 31, pp. 2-3.
- , 1979: *La distinction - critique sociale du jugement*, Paris: Les Éditions de Minuit.
- , 1977: *Outline of a Theory of Practice*, New York: Cambridge University Press.
- Boyce, J. K., Á. Fernández-González, E. Fürst, O. Segura, 1994: *Café y desarrollo sostenible: del cultivo agroquímico a la producción orgánica en Costa Rica*. Heredia, Costa Rica: Editorial Fundación UNA.
- Castro, R., I. Rojas, 2002: "¿Agua para los supernegocios o para las comunidades?", en *Ambien-Tico* (Universidad Nacional, Costa Rica), No. 104, Mayo, pp. 18-19.
- ACG (Asociación Confraternidad Guanacasteca), 2003a: "Sala Constitucional nuevamente nos da la razón. Municipalidad de Santa Cruz no acató orden de detener la construcción de los condominios de Desarrollos Turísticos Guanacaste, S.A. (Meliá) dictada por la SETENA", en *Confraternidad en Acción*, No. 6, pp. 3-6.
- , 2003b: "Pueblos de la costa de Santa Cruz marcharon hacia el Meliá Conchal", en *Confraternidad en Acción*, No. 6, p. 7.
- CNA (Comisión Nacional de Aguas), 2002: *Episodio de contaminación del acueducto metropolitano de agua potable, de julio de 2001. Estudio realizado por la Comisión Nacional de Aguas (durante el período agosto-diciembre 2001). Informe*, Comisión Nacional de Aguas, San José, Costa Rica, marzo.
- CBI (Chiquita Brands International), 2002: *2001 Corporate Responsibility Report*, Chiquita Brands Internacional, Ohio.
- , 2001: *2000 Corporate Responsibility Report*, Chiquita Brands Internacional, Ohio.
- Ciencias Ambientales* (Escuela de Ciencias Ambientales, Universidad Nacional, Costa Rica), No. 13, Noviembre 1997.
- Ciencias Ambientales* (Escuela de Ciencias Ambientales, Universidad Nacional, Costa Rica), No. 14, Junio 1998.
- FAPP (Fundación Arias para la Paz y el Progreso). 1997: *Creación de una instancia coordinadora para detener el impacto de la expansión bananera incontrolada*. San José, Costa Rica: Fundación Arias para la Paz y el Progreso.
- FECÓN (Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente), 2003: "Meliá Conchal dejaría sin agua a trece comunidades", en *Diálogos Ambientales*, Abril, p. 8.

- FEDEAGUA, 2002: *Privatización del suministro del recurso agua: un debate que cobra fuerza*, presentado al Centro de Estudios y Publicaciones ALFORJA para el informe anual de Control Ciudadano (Social Watch), San José, Costa Rica, inédito.
- Fernández-González, A., 2003a: "Cooperación y conflicto: elementos de análisis político con perspectiva ética y horizonte utópico", ensayo presentado en el *Seminario "Subjetividad, intersubjetividad y cultura"* (Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura, Universidad de Costa Rica), julio.
- , 2003b: "Actualidad ambiental y ambientalismo tico", *Ambien-Tico* (Universidad Nacional, Costa Rica), No. 116, Mayo, pp. 18-19.
- , 1999: "Pluralism, social capital, and accountability in sustainable forest management (a view from Costa Rica)", *Sustainable Forest Management: a seminar on the Internet*, The World Bank Institute, 14-27 de junio. Versión en español publicada en *Ambien-Tico* (Universidad Nacional, Costa Rica), N° 76, Noviembre 1999.
- , 1998: *La formación ambiental en la educación superior de Centroamérica: el caso de Costa Rica*, informe final de consultoría, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Guatemala, Diciembre.
- , 1986: "Contradicciones sociales y práctica simbólica popular: hacia una estrategia democrática frente a la crisis", ponencia presentada en el *Primer Congreso de Antropología* (Universidad de Costa Rica, 29-31 de mayo de 1985), publicada en *Cuadernos de Antropología* (Universidad de Costa Rica), No. 5, Julio 1986, pp. 10-27.
- Fernández-González, A., E. E. Gutiérrez-Espeleta, 2002: "Freshwater in Costa Rica: abundant yet constrained", en E. A. Page, M. Redclift, editores, *Human Security and the Environment. International Comparisons*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, Reino Unido; Northampton, Massachusetts. Estados Unidos, pp. 267-284.
- Fournier, L., 1991: *Desarrollo y perspectivas del movimiento conservacionista costarricense*, San José, Costa Rica Editorial Universidad de Costa Rica.
- Fürst, E., y W. Hein, editores, 2002: *Turismo de larga distancia y desarrollo regional en Costa Rica: estudios sobre las relaciones económico-ecológicas entre turismo y desarrollo sostenible en los ámbitos globales, nacionales y micro-regionales*, San José, Costa Rica: DEI.
- Laclau, E., C. Mouffe, 1987: *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia*, Madrid: Siglo XXI de España Editores.
- La Gaceta* (Diario oficial de la República de Costa Rica), 2002: *Proyecto de Ley del Recurso Hídrico (expediente No. 14.585)*, 10 de enero.

- La Nación* (San José, Costa Rica), 2003: "AyA pide no tomar el líquido hasta nuevo aviso. 50.000 en riesgo por agua contaminada. Combustible afectó Tibás, Moravia y Goicoechea", 23 de abril.
- , 2002a: "A un año... sigue riesgo en el acueducto. Lentitud en las inversiones paraproteger fuentes", 11 de julio.
- , 2002b: "Pugna por permiso de agua a hotelera. Vecinos piden frenar nuevos condominios", 5 de marzo.
- , 2001: reportajes publicados entre el 15 y el 18 de julio.
- Martínez-Alier, J., 1991: "Ecological perception, environmental policy and distributional conflicts: some lessons from history", en R. Costanza (ed.), *Ecological economics. The science and management of sustainability*, New York: Columbia University Press, pp. 118-136.
- Max-Neef, M., A. Elizalde, M. Hopenhayn, 1986: *Desarrollo a Escala Humana: una opción para el futuro (Development Dialogue, Número Especial 1986)*, Suecia: CEP/AUR/Fundación Dag Hammarskjöld.
- Mead, G. H., 1981 [1909-1922]: *Selected Writings*, London: University of Chicago Press.
- , 1967 [1934]: *Mind, self, and society from the standpoint of a social behaviorist*, Chicago: The University of Chicago Press.
- MIDEPLAN (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica), 1998: *Costa Rica: Panorama Nacional 1997. Balance anual social, económico y ambiental*, San José, Costa Rica: MIDEPLAN.
- , 1997: *Costa Rica: Panorama Nacional 1996. Balance anual social, económico y ambiental*, San José, Costa Rica: MIDEPLAN.
- , 1996: *Costa Rica: Panorama Nacional 1995. Balance anual social, económico y ambiental*, San José, Costa Rica: MIDEPLAN.
- MINAE y PNUMA (Ministerio del Ambiente y Energía, República de Costa Rica; Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), 2002: *GEO Costa Rica: una perspectiva sobre el medio ambiente 2002*, San José, Costa Rica: Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica.
- Mires, F., 1990: *El discurso de la naturaleza. Ecología y política en América Latina*, San José, Costa Rica: Departamento Ecuménico de Investigaciones.
- Montoya, P. J., 1999: *Social and cultural capital: empowerment for sustainable development in the mountains of Escazú, Costa Rica*, Ph.D. Dissertation, The University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico, May.

- OPS y OMS (Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud), 2001: *Informe regional sobre la Evaluación 2000 en la región de las Américas: Agua potable y saneamiento, estado actual y perspectivas*, Washington D.C.: Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS), División de Salud y Ambiente (HEP), Septiembre.
- Ostrom, E., 1998: "A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory of Collective Action (Presidential Address, American Political Science Association, 1997), *American Political Science Review*, Vol. 92, No. 1, March, pp. 1-22.
- , 1997: *Institutional rational choice: an assessment of the IAD framework*, Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Bloomington, Indiana.
- , 1990: *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, New York: Cambridge University Press.
- Ostrom, E., R. Gardner y J. Walker, 1994: *Rules, Games, and Common-Pool Resources*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Ostrom, E., L. Wynne, S. Schroeder, 1993: *Institutional Incentives and Sustainable Development. Infrastructure Policies in Perspective*, Boulder, Colorado: Westview Press, Inc.
- PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), 2000: *GEO América Latina y el Caribe: Perspectivas del medio ambiente 2000*, San José, Costa Rica: Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica.
- Poulantzas, N., 1979 [1978]: *Estado, poder y socialismo*, México: Siglo XXI Editores.
- Rainforest Alliance, 2003a: *Certified Area Summary and Farm list. Certified 'Well-Managed' Farms (updated 7/2/2003)*, Rainforest Alliance, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos (en <http://www.rainforestalliance.com/programs/cap/farm-list.pdf>, consultado el 4 de agosto de 2003).
- , 2003b: "Sustainable agriculture", en <http://www.rainforestalliance.com/programs/cap/index.html>, consultado el 4 de agosto.
- Ricoeur, P., 1996 [1990]: *Sí mismo como otro*, México: Siglo XXI Editores.
- Romero-Pérez, J. E., 2001: "Derecho ambiental", en *Revista de Ciencias Jurídicas* (Universidad de Costa Rica, Colegio de Abogados), No. 95, Mayo-Agosto, pp. 103-143.
- Ruha, R., 1988: "Ideological trends in Indian environmentalism", en *Economic and Political Weekly*, Vol. 23, No. 49, 3 de diciembre.
- Sobrado, J. J., 2001a: "Helechos. Acata, no cumple", *La Nación*, 10 de setiembre (citado por Romero-Pérez, 2001).
- , 2001b: "Puras mentiras", *La Nación*, 11 de agosto (citado por Romero-Pérez, 2001).

- TCA (Tribunal Centroamericano del Agua), 2000: “Denuncia pública: Actividad productiva de helechos. Cantón de Alajuela, distritos de Alajuela, San Isidro (comunidad de Dulce Nombre) y Sabanilla; cantón de Poás, distritos de Sabana Redonda, San Rafael, San Pedro, comunidades de Poasito y Fraijanes, provincia de Alajuela. República de Costa Rica”, presentada en la *1ª Audiencia pública de juzgamiento del Tribunal Centroamericano del Agua*, 28 de agosto al 1 de setiembre de 2000, Auditorio Nacional, San José.
- URI (Unimer Research International), 2002: *Valores ambientales de los y las costarricenses*, San José, Costa Rica: Unimer Research International.
- van den Hombergh, H., 1999: *Guerreros del Golfo Dulce. Industria forestal y conflicto en la Península de Osa, Costa Rica*, San José: DEI.
- Watson, V., S. Cervantes, C. Castro, L. Mora, M. Solís, I. T. Porras, B. Cornejo, 1998: *Abriendo espacio para una mejor actividad forestal. Estudio de Costa Rica*, San José, Costa Rica: Proyecto “Políticas exitosas para los bosques y la gente”, Centro Científico Tropical (Costa Rica). International Institute for Environment and Development (Inglaterra).